



INGLES

Colombia ante el retorno de la seguridad: el desafío de convertir poder en gobernabilidad

Del discurso presidencial a la prueba del territorio

General Oswaldo Moreno
ASOCID — ECUADOR
Quito, 27 de agosto de 2026



Método Mental Sistémico by Osmov 5D, AAI

QUITO — El discurso pronunciado por el presidente Abelardo De La Espriella durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar ofrece un punto de partida especialmente revelador. No se limita a anunciar una política: formula un diagnóstico, identifica amenazas, señala instrumentos de poder y proyecta un estado final deseado.

Su razonamiento parte de una cadena política directa: sin seguridad no hay libertad; sin autoridad no hay justicia; y sin tranquilidad el desarrollo pierde sustento. Al mismo tiempo, describe territorios y comunidades donde la presencia estatal habría retrocedido frente a organizaciones violentas.

La pregunta estratégica, por tanto, no es si el discurso es contundente. Es otra, mucho más exigente: ¿puede la decisión política, mediante el empleo coordinado del poder nacional, producir una recuperación sostenible de la gobernabilidad y de la estabilidad territorial?

Esa es la ecuación que Colombia tendrá que resolver en el territorio, no solamente en el discurso.

Abstract

Colombia faces a strategic challenge that goes beyond the operational defeat of illegal armed organizations: transforming political decision and national power into sustainable

governance and effective territorial authority. Drawing on the presidential security discourse as a point of departure, this article examines the interaction among governance, national power and strategic leadership; the risks of relying on national averages; and the need to distinguish tactical success from lasting strategic effects. Its central argument is that security policy should ultimately be assessed by the State's capacity to recover, consolidate and sustain authority in the territories without having to repeatedly reconquer the same spaces.

Keywords:

Colombia; national security; governance; national power; strategic leadership; territorial control.

1. El problema no es solamente la violencia

Reducir el conflicto colombiano a estadísticas de homicidios, secuestros, extorsiones o enfrentamientos armados puede conducir a una interpretación incompleta.

Detrás de esas manifestaciones existe un problema sistémico mayor: la capacidad de diferentes actores para ejercer influencia, coerción y control sobre poblaciones, economías y territorios.

Cuando una organización ilegal determina quién circula, quién produce, quién comercia, quién paga, quién permanece o quién

abandona un territorio, el problema deja de ser exclusivamente policial o militar. Se convierte en una disputa sobre la capacidad efectiva de regulación social.

Por eso resulta particularmente significativa la orden presidencial de que no exista ningún lugar de la geografía colombiana donde la República renuncie a ejercer su autoridad.

La recuperación territorial, entendida estratégicamente, no significa solamente desplegar Fuerzas Militares o Policía. Significa restablecer de manera sostenible la primacía del Estado.

2. Tres variables para comprender el problema colombiano

La situación puede analizarse mediante la interacción de tres grandes componentes: gobernabilidad y estabilidad; poder nacional; y conducción estratégica.

La primera expresa la capacidad del Estado para mantener autoridad, legitimidad, presencia institucional y funcionamiento normal dentro de su territorio.

La segunda comprende los instrumentos disponibles para materializar esa autoridad. No se limita a las Fuerzas Armadas. Incluye las capacidades políticas, económicas, sociales, diplomáticas, militares, policiales y tecnológicas del Estado.

La tercera corresponde a la capacidad de decidir: identificar objetivos, establecer prioridades, coordinar instituciones, asignar recursos, conducir acciones y modificar decisiones cuando los resultados obtenidos no corresponden con los esperados.

Las tres están relacionadas.

Un Estado puede poseer enormes recursos y, sin embargo, carecer de una conducción capaz de integrarlos. Puede tener una conducción política decidida, pero instrumentos insuficientes para materializarla. O puede disponer simultáneamente de voluntad y poder y, pese a ello, fracasar en transformar esas capacidades en gobernabilidad territorial sostenible.

Colombia deberá resolver precisamente esa interacción.

3. La decisión como punto de partida

En el discurso presidencial, la conducción política aparece como la variable más claramente definida.

Existe un objetivo: recuperar la seguridad.

Existe una misión: restablecer la autoridad estatal sobre el territorio.

Existe un instrumento prioritario: la Fuerza Pública.

Y existe una decisión política explícita de respaldar su actuación dentro del marco constitucional y legal.

La orientación se vuelve todavía más explícita cuando el discurso plantea perseguir las finanzas de las organizaciones terroristas, dismantelar sus redes y neutralizar sus estructuras mediante captura y acción de la fuerza legítima del Estado.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre decidir y conducir.

La decisión inicia el movimiento estratégico. La conducción debe sostenerlo.

Una declaración política puede modificar inmediatamente las expectativas de las Fuerzas Armadas, la Policía, la burocracia, la sociedad y los propios adversarios. Pero su verdadera capacidad estratégica solamente puede comprobarse cuando esa voluntad se transforma en coordinación institucional, inteligencia, recursos, operaciones, presencia territorial y resultados sostenibles.

Por ello, la voluntad política declarada no debe confundirse automáticamente con capacidad efectiva de conducción.

4. Poder disponible no significa poder efectivo

Colombia dispone de unas Fuerzas Militares y una Policía estructuradas, experiencia operacional acumulada y capacidades estatales significativas.

El desafío consiste en transformar ese poder disponible en efectos estratégicos sostenibles.

La diferencia es fundamental.

Una operación puede producir capturas, incautaciones o neutralizaciones y constituir un éxito táctico. Pero el resultado estratégico solamente aparece cuando esos efectos modifican favorablemente las condiciones que permitieron la existencia y reproducción de la amenaza.

Si después de una operación otra estructura ocupa el territorio abandonado por la anterior, si las economías ilegales continúan funcionando, si las comunidades siguen sometidas a coerción o si el Estado no consigue establecer presencia institucional permanente, el éxito operacional no necesariamente se convierte en victoria estratégica.

5. Gobernabilidad: la verdadera variable de resultado

Aquí aparece probablemente el elemento central.

La finalidad del empleo del poder estatal no debería medirse exclusivamente por el número de operaciones realizadas o de estructuras neutralizadas. El resultado estratégico debe observarse finalmente en la recuperación de gobernabilidad.

El propio discurso presidencial ofrece indicadores para hacerlo: ciudadanos capaces de caminar seguros, campesinos que puedan producir sin extorsión, familias libres del reclutamiento forzado y comunidades que no necesiten autorización de organizaciones delincuenciales para desarrollar su vida cotidiana.

Esos elementos permiten convertir una promesa política en una hipótesis verificable.

Si aumenta la capacidad estatal y simultáneamente disminuyen la coerción criminal, la extorsión, el desplazamiento, el reclutamiento y las restricciones impuestas a la población, puede hablarse de recuperación efectiva.

Si aumenta el esfuerzo estatal pero esas condiciones permanecen o se trasladan geográficamente, será necesario revisar la estrategia.

La gobernabilidad, por tanto, debe convertirse en variable de resultado, no simplemente en aspiración política.

6. El peligro de los promedios nacionales

Existe, además, una dificultad metodológica que Colombia obliga a considerar.

Un Estado puede conservar instituciones nacionales sólidas y simultáneamente contener territorios donde su capacidad efectiva de gobernar se encuentre severamente deteriorada.

El promedio nacional puede ocultar esa realidad.

Colombia no constituye un espacio estratégico homogéneo. Las condiciones de Bogotá no necesariamente representan las del Catatumbo; las del centro político no son automáticamente equivalentes a las de determinadas áreas del Cauca, Chocó, Nariño o Bajo Cauca.

Esto significa que evaluar únicamente al Estado nacional puede producir una ilusión estadística.

Una valoración estratégica adecuada debería observar simultáneamente el sistema nacional y sus subsistemas territoriales.

El país puede conservar estabilidad estructural mientras determinados espacios experimentan niveles mucho mayores de presión, deterioro o disputa.

Esta diferencia es decisiva porque permite comprender cómo un Estado funcional puede albergar territorios donde actores ilegales desarrollan capacidades de regulación, coerción e incluso control social.

7. El centro estratégico y sus periferias

Surge entonces una manera diferente de observar el territorio colombiano.

En lugar de preguntar exclusivamente cuál es la situación promedio del país, conviene determinar dónde se encuentran sus principales focos de presión y cuánto se apartan de la condición nacional.

Cuanto mayor sea esa dispersión territorial, mayor será el riesgo de interpretar equivocadamente la situación mediante indicadores agregados.

En términos estratégicos, el promedio permite conocer la condición general del sistema; la dispersión permite conocer su vulnerabilidad.

Un país aparentemente estable puede contener periferias altamente deterioradas. Si esas periferias comienzan a conectarse territorial, económica u operacionalmente, dejan de constituir problemas locales aislados y pueden convertirse en una presión sistémica sobre el conjunto.

La geografía del conflicto importa tanto como su intensidad.

8. Una cadena estratégica que deberá demostrarse

El planteamiento presidencial parece descansar sobre una secuencia lógica:

Decisión política → capacidad de acción estatal → recuperación de gobernabilidad y estabilidad.

Es una hipótesis estratégica razonable, pero no una ley automática.

Entre cada uno de esos componentes existen múltiples variables intermedias.

Una mayor decisión política puede producir mayor empleo del poder. Pero un incremento del poder coercitivo no necesariamente genera por sí mismo mayor gobernabilidad.

El efecto dependerá de legitimidad, inteligencia, coordinación institucional, economía, justicia, presencia administrativa, infraestructura, confianza ciudadana, sostenibilidad y capacidad del Estado para permanecer después de la intervención inicial.

Por eso la estrategia necesita retroalimentación.

Decidir, actuar y verificar deben formar parte de un mismo proceso.

Cuando el resultado obtenido no corresponde con el resultado esperado, insistir

mecánicamente en la misma acción no constituye firmeza estratégica. La verdadera conducción exige capacidad para aprender y adaptar.

9. De la recuperación territorial a la paz sostenible

El discurso establece finalmente un estado deseado: una Colombia donde la ley impere, el Estado cumpla su deber y la población pueda desarrollar su vida sin miedo.

Ese objetivo trasciende la dimensión militar.

Las Fuerzas Militares y la Policía pueden generar las condiciones iniciales para recuperar espacios y reducir la capacidad coercitiva de organizaciones ilegales. Pero la consolidación pertenece al Estado en su conjunto.

Después de recuperar un territorio deben llegar justicia, administración, infraestructura, educación, servicios, economía formal y oportunidades.

De lo contrario, el espacio puede volver a ser ocupado por estructuras capaces de reemplazar parcialmente las funciones que el Estado no consiguió ejercer.

La victoria, por tanto, no ocurre cuando termina una operación. Ocurre cuando la presencia extraordinaria de la fuerza deja de ser necesaria para que funcione normalmente la autoridad ordinaria del Estado.

10. Colombia frente a la prueba de la realidad

El nuevo discurso de seguridad colombiano contiene una decisión política claramente identificable: recuperar autoridad, fortalecer la acción estatal y enfrentar a las organizaciones que disputan territorialmente esa autoridad.

Pero la estrategia comienza a ser evaluada precisamente cuando termina el discurso.

El indicador decisivo no será la intensidad de las declaraciones ni, aisladamente, el número de operaciones ejecutadas. Será la transformación verificable de las condiciones existentes en los territorios.

La cuestión estratégica puede resumirse en una relación aparentemente sencilla:

Decisión → Poder → Gobernabilidad.

La complejidad está en conseguir que esa secuencia funcione de manera sostenida.

El Poder Nacional colombiano

Desde las expresiones del Poder Nacional, el reto colombiano exige mucho más que una respuesta militar y policial. La expresión política deberá asegurar dirección, legitimidad, continuidad institucional y coordinación entre los distintos niveles del Estado. La expresión económica tendrá que reducir los espacios que permiten la reproducción de economías ilícitas y ampliar las condiciones para la actividad productiva legal. La expresión social deberá recuperar confianza, cohesión y presencia institucional en comunidades sometidas durante años a coerción y violencia. El dominio informacional deberá contribuir a preservar legitimidad, disputar narrativas, fortalecer la confianza pública y reducir la capacidad de influencia de las organizaciones ilegales. Finalmente, la expresión militar y policial deberá garantizar seguridad, control y libertad de acción suficientes para que las demás capacidades del Estado puedan ingresar, permanecer y consolidarse.

La recuperación de la seguridad, por tanto, no puede entenderse como una suma de operaciones. Debe observarse como una acción integrada del Poder Nacional orientada a modificar de manera permanente las condiciones que sostienen la violencia.

Desde la perspectiva geopolítica, Colombia enfrenta el desafío de ejercer autoridad efectiva sobre un territorio marcado por fronteras extensas, periferias históricamente débiles, corredores de movilidad ilegal y regiones donde la presencia del Estado ha sido desigual. La geografía no constituye solamente el escenario del conflicto: condiciona la relación entre población, autoridad, recursos, conectividad y poder.

Desde la perspectiva geoestratégica, el desafío consiste en identificar qué espacios son

decisivos, qué corredores articulan las amenazas, cuáles territorios permiten la expansión o conexión de estructuras ilegales y dónde debe concentrarse prioritariamente la acción estatal. No todos los territorios poseen el mismo valor estratégico ni generan el mismo efecto sobre el conjunto nacional. La correcta priorización será tan importante como la disponibilidad de fuerzas y recursos.

Desde la perspectiva geoeconómica, la seguridad dependerá también de la capacidad para disputar los circuitos financieros que sostienen a las organizaciones armadas y criminales. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y otras economías ilícitas no constituyen únicamente actividades delictivas: son fuentes de poder, mecanismos de control territorial y sistemas de sostenimiento de estructuras violentas. Combatirlas exige afectar simultáneamente sus ingresos, redes logísticas, mercados, intermediarios y capacidad de penetración en las economías locales.

Estas tres perspectivas convergen en una conclusión central: la seguridad será sostenible únicamente cuando la recuperación territorial se transforme en presencia integral del Estado.

La Fuerza Pública puede abrir espacios y reducir la capacidad coercitiva de las organizaciones ilegales. Pero la consolidación requerirá instituciones, justicia, infraestructura, conectividad, servicios, inversión, oportunidades económicas y legitimidad social. Si estos componentes no llegan después de la recuperación inicial, el territorio continuará siendo vulnerable a nuevos ciclos de penetración y disputa.

Colombia posee poder. Su nueva conducción declara voluntad de emplearlo. La verdadera prueba consistirá en verificar si ese poder logra integrarse, proyectarse territorialmente y producir gobernabilidad sostenible.

Por ello, la pregunta estratégica más importante para los próximos años quizá no sea cuántas estructuras consigue neutralizar el Estado, sino otra mucho más profunda:

¿En cuántos territorios conseguirá Colombia transformar el control recuperado en autoridad permanente, desarrollo legítimo y presencia estatal irreversible?

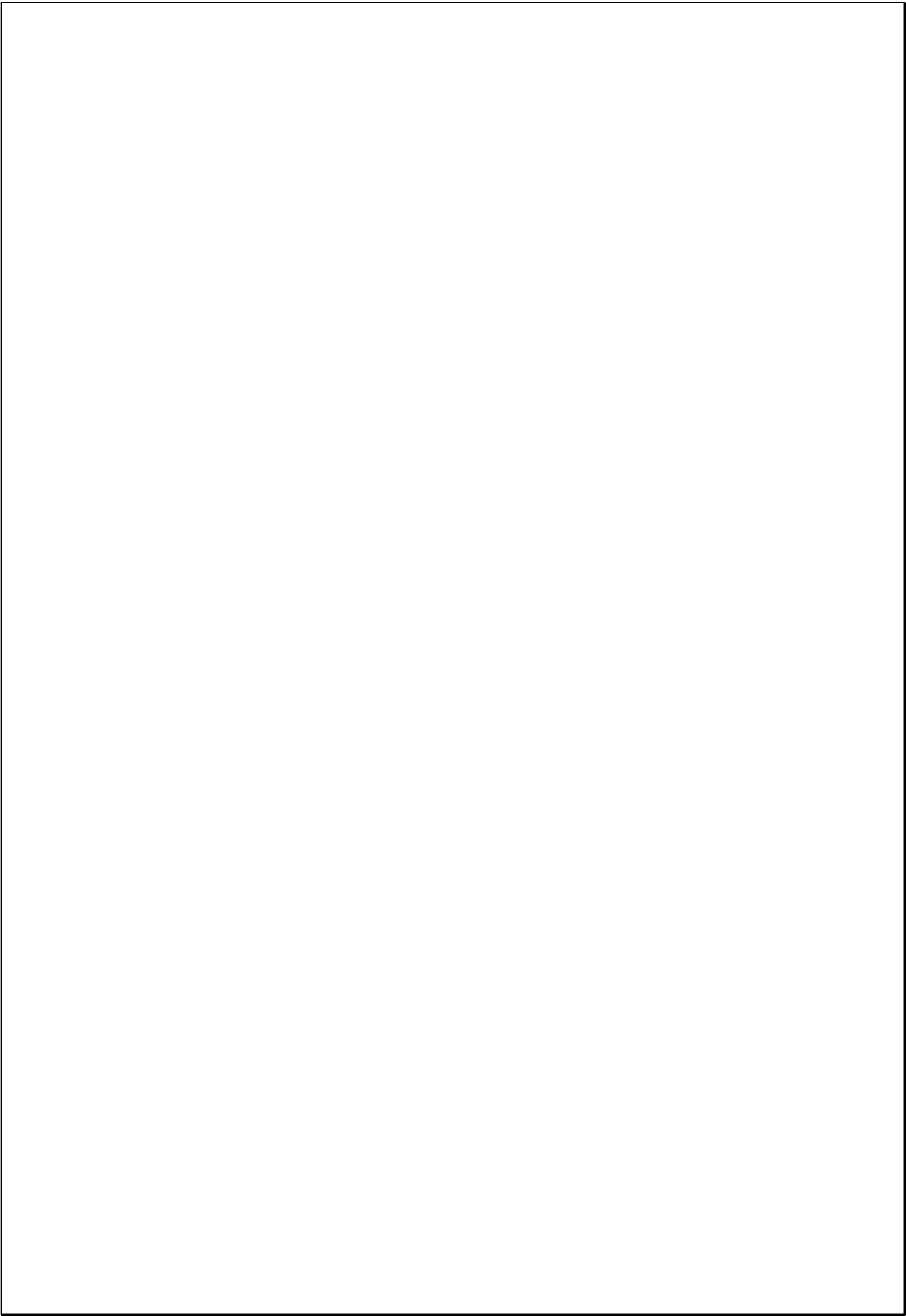
La respuesta dependerá de la capacidad para articular las expresiones del Poder Nacional con las realidades geopolíticas, las prioridades geoestratégicas y las dinámicas geoeconómicas del conflicto.

Allí estará la diferencia entre recuperar un territorio y consolidarlo; entre obtener una ventaja operacional y alcanzar un efecto estratégico; y, finalmente, entre desarrollar una campaña de seguridad y producir una verdadera transformación del Estado sobre su territorio. (O)

Referencias:

- De La Espriella, A. (2026). Discurso pronunciado por el presidente de la República de Colombia durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar. Colombia.
- Moreno, O. (2026). Método Mental Sistémico OSMOV 5D. Doctrina y metodología documental.

osmov@hotmail.com



Colombia facing the return of security: the challenge of turning power into governance

From the Presidential Discourse to the Test of the Territory

General Oswaldo Moreno
ASOCID — ECUADOR
Quito, August 27, 2026



Systemic Mental Method by Osmov 5D, AAI

QUITO — The speech delivered by President Abelardo De La Espriella during the ceremony recognizing the new military high command offers an especially revealing point of departure. It does not merely announce a policy: it formulates a diagnosis, identifies threats, points to instruments of power, and projects a desired end state.

His reasoning begins with a direct political chain: without security there is no freedom; without authority there is no justice; and without tranquility, development loses its foundation. At the same time, he describes territories and communities where the State's presence would have receded in the face of violent organizations.

The strategic question, therefore, is not whether the discourse is forceful. It is another, far more demanding one: can political decision, through the coordinated employment of national power, produce a sustainable recovery of governance and territorial stability?

That is the equation Colombia will have to resolve in the territory, not merely in discourse.

Abstract

Colombia faces a strategic challenge that goes beyond the operational defeat of illegal armed organizations: transforming political decision and national power into sustainable governance and effective territorial authority. Drawing on the presidential security discourse as a point of departure, this article examines the interaction among governance,

national power and strategic leadership; the risks of relying on national averages; and the need to distinguish tactical success from lasting strategic effects. Its central argument is that security policy should ultimately be assessed by the State's capacity to recover, consolidate and sustain authority in the territories without having to repeatedly reconquer the same spaces.

Keywords: Colombia; national security; governance; national power; strategic leadership; territorial control.

1. The Problem Is Not Only Violence

Reducing the Colombian conflict to statistics on homicides, kidnappings, extortion, or armed clashes can lead to an incomplete interpretation.

Behind these manifestations lies a larger systemic problem: the capacity of different actors to exercise influence, coercion, and control over populations, economies, and territories.

When an illegal organization determines who moves, who produces, who trades, who pays, who remains, or who leaves a territory, the problem ceases to be exclusively police or military in nature. It becomes a dispute over the effective capacity for social regulation.

For that reason, the presidential order that there be no place in Colombian geography where the Republic relinquishes the exercise of its authority is particularly significant.

Territorial recovery, understood strategically, does not mean merely deploying the Military Forces or Police. It means sustainably reestablishing the primacy of the State.

2. Three Variables for Understanding the Colombian Problem

The situation can be analyzed through the interaction of three major components: governance and stability; national power; and strategic leadership.

The first expresses the State's capacity to maintain authority, legitimacy, institutional presence, and normal functioning within its territory.

The second encompasses the instruments available to materialize that authority. It is not limited to the Armed Forces. It includes the State's political, economic, social, diplomatic, informational, police, and military capabilities.

The third corresponds to the capacity to decide: identify objectives, establish priorities, coordinate institutions, allocate resources, conduct actions, and modify decisions when the results obtained do not correspond to those expected.

The three are interrelated.

A State may possess enormous resources and yet lack leadership capable of integrating them. It may have determined political leadership but insufficient instruments to materialize it. Or it may simultaneously possess will and power and, despite this, fail to transform those capabilities into sustainable territorial governance.

Colombia must resolve precisely that interaction.

3. Decision as the Point of Departure

In the presidential discourse, political leadership appears as the most clearly defined variable.

There is an objective: to recover security.

There is a mission: to reestablish State authority over the territory.

There is a priority instrument: the Public Force.

And there is an explicit political decision to support its actions within the constitutional and legal framework.

The orientation becomes even more explicit when the discourse proposes pursuing the finances of terrorist organizations, dismantling their networks, and neutralizing their structures through capture and the action of the State's legitimate force.

However, there is a fundamental difference between deciding and leading.

Decision initiates strategic movement. Leadership must sustain it.

A political declaration can immediately modify the expectations of the Armed Forces, the Police, the bureaucracy, society, and the adversaries themselves. But its true strategic capacity can only be verified when that will is transformed into institutional coordination, intelligence, resources, operations, territorial presence, and sustainable results.

Therefore, declared political will should not automatically be confused with effective leadership capacity.

4. Available Power Does Not Mean Effective Power

Colombia has structured Military Forces and Police, accumulated operational experience, and significant State capabilities.

The challenge is to transform that available power into sustainable strategic effects.

The difference is fundamental.

An operation may produce arrests, seizures, or neutralizations and constitute a tactical success. But the strategic result appears only when those effects favorably modify the conditions that allowed the threat to exist and reproduce.

If, after an operation, another structure occupies the territory abandoned by the previous one, if illegal economies continue to function, if communities remain subject to coercion, or if the State fails to establish a permanent institutional presence, operational success does not necessarily become strategic victory.

5. Governance: The True Outcome Variable

Here, probably, lies the central element.

The purpose of employing State power should not be measured exclusively by the number of operations carried out or structures neutralized. The strategic result must ultimately be observed in the recovery of governance.

The presidential discourse itself offers indicators for doing so: citizens able to walk safely, farmers able to produce without extortion, families free from forced recruitment, and communities that do not need authorization from criminal organizations to conduct their daily lives.

These elements make it possible to turn a political promise into a verifiable hypothesis.

If State capacity increases while criminal coercion, extortion, displacement, recruitment, and restrictions imposed on the population simultaneously decrease, one can speak of effective recovery.

If State effort increases but those conditions remain or shift geographically, the strategy will need to be reviewed.

Governance, therefore, must become an outcome variable, not merely a political aspiration.

6. The Danger of National Averages

There is, moreover, a methodological difficulty that Colombia compels us to consider.

A State may retain solid national institutions while simultaneously containing territories where its effective capacity to govern is severely deteriorated.

The national average can conceal that reality.

Colombia does not constitute a homogeneous strategic space. Conditions in Bogotá do not necessarily represent those in Catatumbo; those of the political center are not automatically equivalent to those in certain areas of Cauca, Chocó, Nariño, or Bajo Cauca.

This means that evaluating only the national State can produce a statistical illusion.

An adequate strategic assessment should simultaneously observe the national system and its territorial subsystems.

The country may retain structural stability while certain spaces experience much higher levels of pressure, deterioration, or contestation.

This difference is decisive because it makes it possible to understand how a functioning State can contain territories where illegal actors develop capacities for regulation, coercion, and even social control.

7. The Strategic Center and Its Peripheries

A different way of observing Colombian territory then emerges.

Instead of asking exclusively what the country's average situation is, it is useful to determine where its main pressure points are located and how far they depart from the national condition.

The greater that territorial dispersion, the greater the risk of misinterpreting the situation through aggregate indicators.

In strategic terms, the average makes it possible to understand the system's general condition; dispersion makes it possible to understand its vulnerability.

An apparently stable country may contain highly deteriorated peripheries. If those peripheries begin to connect territorially, economically, or operationally, they cease to constitute isolated local problems and can become systemic pressure on the whole.

The geography of conflict matters as much as its intensity.

8. A Strategic Chain That Must Be Demonstrated

The presidential approach appears to rest on a logical sequence:

Political decision → State capacity for action
→ recovery of governance and stability.

It is a reasonable strategic hypothesis, but not an automatic law.

There are multiple intervening variables between each of these components.

Greater political determination may produce greater employment of power. But an increase in coercive power does not necessarily generate greater governance by itself.

The effect will depend on legitimacy, intelligence, institutional coordination, the economy, justice, administrative presence, infrastructure, public trust, sustainability, and the State's capacity to remain after the initial intervention.

That is why strategy requires feedback.

Deciding, acting, and verifying must form part of the same process.

When the result obtained does not correspond to the expected result, mechanically insisting on the same action does not constitute strategic resolve. True leadership requires the capacity to learn and adapt.

9. From Territorial Recovery to Sustainable Peace

The discourse ultimately establishes a desired state: a Colombia where the law prevails, the State fulfills its duty, and the population can conduct its life without fear.

That objective transcends the military dimension.

The Military Forces and the Police can generate the initial conditions to recover spaces and reduce the coercive capacity of illegal organizations. But consolidation belongs to the State as a whole.

After a territory is recovered, justice, administration, infrastructure, education, services, the formal economy, and opportunities must arrive.

Otherwise, the space may once again be occupied by structures capable of partially replacing the functions that the State failed to exercise.

Victory, therefore, does not occur when an operation ends. It occurs when the extraordinary presence of force is no longer necessary for the State's ordinary authority to function normally.

10. Colombia Facing the Test of Reality

The new Colombian security discourse contains a clearly identifiable political decision: recover authority, strengthen State action, and confront the organizations that territorially contest that authority.

But strategy begins to be evaluated precisely when the discourse ends.

The decisive indicator will not be the intensity of the declarations nor, in isolation, the number of operations executed. It will be the verifiable transformation of the conditions existing in the territories.

The strategic question can be summarized in an apparently simple relationship:

Decision → Power → Governance.

The complexity lies in ensuring that this sequence works sustainably.

Colombian National Power

From the perspective of the Expressions of National Power, Colombia's challenge requires much more than a military and police response. The political expression must ensure direction, legitimacy, institutional continuity, and coordination among the different levels of the State. The economic must reduce the spaces that allow illicit economies to reproduce and expand the conditions for legal productive activity. The social expression must restore trust, cohesion, and institutional presence in communities subjected for years to coercion and violence. The informational dimension must help preserve legitimacy, contest narratives, strengthen public trust, and reduce the influence capacity of illegal organizations. Finally, the military and police expression must guarantee sufficient security, control, and freedom of action so that the State's other capabilities can enter, remain, and consolidate.

The recovery of security, therefore, cannot be understood as a sum of operations. It must be viewed as an integrated action of National Power aimed at permanently modifying the conditions that sustain violence.

From a geopolitical perspective, Colombia faces the challenge of exercising effective authority over a territory marked by extensive borders, historically weak peripheries, corridors of illegal mobility, and regions where the State's presence has been uneven. Geography is not merely the setting of the conflict: it conditions the relationship among population, authority, resources, connectivity, and power.

From a geostrategic perspective, the challenge is to identify which spaces are decisive, which corridors connect the threats, which territories enable the expansion or connection of illegal structures, and where State action should be concentrated as a priority. Not all territories possess the same strategic value or generate the same effect on the national whole. Correct prioritization will be as important as the availability of forces and resources.

From a geoeconomic perspective, security will also depend on the capacity to contest the financial circuits that sustain armed and criminal organizations. Drug trafficking, illegal mining, extortion, smuggling, and other illicit economies are not merely criminal activities: they are sources of power, mechanisms of territorial control, and systems that sustain violent structures. Combating them requires simultaneously affecting their revenues, logistics networks, markets, intermediaries, and capacity to penetrate local economies.

These three perspectives converge on a central conclusion: security will be sustainable only when territorial recovery is transformed into comprehensive State presence.

The Public Force can open spaces and reduce the coercive capacity of illegal organizations. But consolidation will require institutions, justice, infrastructure, connectivity, services,

investment, economic opportunities, and social legitimacy. If these components do not arrive after the initial recovery, the territory will remain vulnerable to new cycles of penetration and contestation.

Colombia possesses power. Its new leadership declares the will to employ it. The true test will be to verify whether that power can be integrated, projected territorially, and produce sustainable governance.

Therefore, the most important strategic question for the coming years may not be how many structures the State manages to neutralize, but another, much deeper one:

In how many territories will Colombia succeed in transforming recovered control into permanent authority, legitimate development, and irreversible State presence?

The answer will depend on the capacity to articulate the Expressions of National Power with the geopolitical realities, geostrategic priorities, and geoeconomic dynamics of the conflict.

Therein will lie the difference between recovering a territory and consolidating it; between obtaining an operational advantage and achieving a strategic effect; and, ultimately, between conducting a security campaign and producing a true transformation of the State across its territory.

References:

- De La Espriella, A. (2026). Speech delivered by the President of the Republic of Colombia during the ceremony recognizing the new military high command. Colombia.
- Moreno, O. (2026). OSMOV 5D Systemic Mental Method. Doctrinal and methodological document.

osmov@hotmail.com